



OPINIÓN



Por una mayor efectividad institucional para las políticas públicas

Carlos Cruz,
 director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

Uno de los aspectos más destacables del actual debate presidencial es el amplio consenso entre los principales candidatos —tanto del oficialismo como de la oposición— en cuanto a las prioridades del país: enfrentar decididamente la crisis de seguridad que afecta a millones de chilenos y recuperar el crecimiento económico. Esta coincidencia debiera ser motivo de optimismo. Solo un esfuerzo colectivo de esta magnitud podrá devolver la esperanza de avanzar hacia el desarrollo con el que alguna vez soñamos, especialmente durante el dinámico primer decenio de este siglo.

Retomar una senda de crecimiento sostenible, que supere el magro 2% del PIB proyectado, exige una inversión sustancialmente mayor. Según el economista Sergio Urzúa, deberíamos invertir al menos un 10% más. Para ello, se requieren proyectos con retornos atractivos, certezas regulatorias y plazos razonables de ejecución. Es decir, condiciones que hagan posible una toma de decisiones ágil y técnicamente fundamentada.

Chile tiene ventajas competitivas evidentes en sectores como la minería, la agroindustria, el sector forestal, las energías renovables y sus industrias

derivadas, el turismo y los servicios logísticos. Todas estas áreas pueden convertirse en verdaderos motores de crecimiento si somos capaces de conectarlas eficazmente con los mercados globales. Nuestra ubicación en el Pacífico Sur nos entrega una ventaja geoestratégica relevante, pero esta solo se materializa si disponemos de una infraestructura de clase mundial que garantice acceso fluido, confiable y competitivo a los principales mercados.

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

En este sentido, la logística, y particularmente la infraestructura portuaria, debe ocupar un lugar central en nuestra estrategia de desarrollo. No se trata solo de ampliar la capacidad de los puertos de San Antonio y Valparaíso —fundamentales para el comercio exterior—, sino también de fortalecer los terminales del norte, centro-sur y sur del país. Esto cobra aún más relevancia si consideramos las oportunidades que ofrecen los corredores bioceánicos para integrarnos como plataforma de servicios para nuestros países vecinos.

Brasil, Argentina y Paraguay necesitan llegar a



Retomar una senda de crecimiento sostenible exige una inversión sustancialmente mayor.

La logística, y particularmente la infraestructura portuaria, debe ocupar un lugar central en nuestra estrategia de desarrollo.

los países ubicados en el Asia-Pacífico y es evidente que a través de los puertos chilenos les es más efectivo, en tanto estos les provean de los servicios eficientes que se requiere. Nos imaginamos al menos tres "hub" logísticos de

categoría mundial: en el norte, para apoyar el Corredor Bioceánico Capricornio; otro en la Región de Valparaíso, para hacer efectivo el corredor en la zona central, y sería importante implementar otro en la Región del Biobío, para dotar al

centro-sur del país de una alternativa para la producción local, pero también para apoyar el desarrollo que está teniendo el sur argentino como consecuencia del gas natural y de otros productos de alto valor.

A este desafío portuario se suma la necesidad de mejorar los accesos viales y ferroviarios, fomentar nodos logísticos eficientes, promover el desarrollo de servicios asociados al comercio exterior y no olvidar el rol estratégico del transporte aéreo de carga. Todos estos elementos requieren planificación, coordinación y una mirada sistémica.

ARTICULACIÓN DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

En este contexto, resulta urgente avanzar hacia una institucionalidad que permita una mejor articulación de los proyectos estratégicos del país. Desde el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), hemos propuesto la creación de una entidad supraministerial, con respaldo presidencial, que identifique y viabilice las inversiones clave para potenciar nuestras capacidades productivas y logísticas. No se trata de crear más burocracia, sino de dotar al Estado de una herramienta moderna y eficaz para alinear la inversión pública y privada con una visión país de largo plazo.

Nuestros competidores regionales ya han dado pasos concretos en esa dirección. Chile no puede quedarse atrás. La oportunidad está sobre la mesa. Se requiere decisión, liderazgo y sentido de urgencia.